

## Esta huelga de hambre no está siendo televisada

JONATHAN COOK :: 13/12/2025

Seis presos políticos que atacaron fábricas británicas que suministran armas para el genocidio de Israel llevan semanas en huelga de hambre. Pero está siendo ignorada por los medios

Si realmente tuviéramos medios de comunicación libres en el Reino Unido, en lugar de unos que solo sirven a los intereses del Estado y de la clase multimillonaria, esta sería una noticia de primera plana:

Seis presos políticos, recluidos ilegalmente durante un año o más en prisión preventiva y considerados retroactivamente «terroristas» por intentar detener el genocidio de Gaza, llevan semanas en huelga de hambre en prisión. Al menos uno de ellos ya se encuentra gravemente enfermo.

Los medios de comunicación han guardado un silencio absoluto sobre estos acontecimientos y apenas han informado sobre las terribles condiciones a las que están sometidos estos presos políticos desde que el Gobierno de Sir Keir Starmer reclasificó a Palestine Action como organización terrorista, tras su detención.

Cabe destacar que es la primera vez que un grupo de acción directa, que dirige su violencia contra la propiedad --es decir, contra fábricas que fabrican armas para matar a civiles en Gaza-- y no contra personas, ha sido declarado organización terrorista y puesto al mismo nivel que Al Qaeda y el Estado Islámico.

En virtud de la draconiana Ley contra el Terrorismo del Reino Unido, cualquier persona que exprese una opinión, incluso de forma inadvertida, que pueda «fomentar el apoyo» a una organización proscrita --entre las que ahora se incluye Palestine Action-- puede ser detenida por apoyar el terrorismo y enfrentarse a una condena por terrorismo.

Con al menos 2500 personas detenidas por llevar pancartas en las que se leía «Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action», las cárceles británicas podrían verse pronto inundadas de muchos más presos políticos de este tipo.

En los últimos días se ha celebrado en el Tribunal Superior una revisión judicial de la decisión del Gobierno, aunque es poco probable que usted lo sepa, dada la falta de interés de los medios de comunicación británicos. Se espera que los jueces se pronuncien sobre la legalidad de la decisión del Gobierno a mediados de enero.

Pero una sentencia relacionada dictada esta semana por un juez de Jersey, que juzga un caso de terrorismo contra la activista por la paz Natalie Strecker, abre aún más la puerta a los procesos políticos. A pesar de liberar a Strecker, el juez Saunders pareció aceptar el argumento del Gobierno británico de que es ilegal defender el derecho internacional, que establece expresamente que los pueblos ocupados, como los palestinos, tienen derecho a resistirse a su ocupación ilegal.

Para cualquiera que tenga buena memoria, el silencio actual de nuestros medios de comunicación debería ser impactante. La última huelga de hambre importante de presos políticos en el Reino Unido tuvo lugar a principios de la década de 1980. Fue entonces cuando el IRA Provisional --una organización que reivindicó expresamente la autoría de atentados con bombas en pubs, hoteles y parques públicos, en los que murieron cientos de civiles-- organizó una huelga de hambre en la prisión de Maze, cerca de Belfast, para exigir la mejora de las condiciones carcelarias.

Uno de los huelguistas de hambre, Bobby Sands, se convirtió en un nombre muy conocido en Gran Bretaña. Su historia acaparó los titulares durante semanas y provocó un importante enfrentamiento, a través de los medios de comunicación, con el régimen de Thatcher. Su muerte tuvo repercusiones durante mucho tiempo y, en última instancia, dio paso al proceso de paz en Irlanda del Norte.

Eso contrasta con nuestra situación actual. Los miembros encarcelados de Palestine Action, una organización que rechaza expresamente la violencia contra las personas y que está tratando de detener una matanza en Gaza que los principales grupos humanitarios y estudiosos del genocidio coinciden en calificar de genocidio, están en huelga de hambre porque sus derechos están siendo violados de forma grave y sistemática, como presos políticos. Y los medios de comunicación apenas se hacen eco de ello.

Cabe destacar que la cobertura mediática de las condiciones carcelarias y los abusos legales de otro preso político reciente fue igualmente mínima. El periodista y editor Julian Assange pasó cinco años en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres, acusado de cargos falsos para justificar su extradición a EEUU por publicar textos y videos de los crímenes de guerra británicos y estadounidenses en Afganistán e Irak.

Los medios de comunicación dieron una cobertura muy superficial a su caso y evitaron detallar de qué se le acusaba, porque esos detalles habrían pintado un panorama condenatorio para los gobiernos británico y estadounidense. Sin una pizca de ironía, la prensa prestó más atención a los discursos de los mismos políticos que encarcelaron a Assange, en los que condenaban el sufrimiento de los presos políticos, incluidos los periodistas, en Rusia y China.

Nada de esto debería ser normal. La huelga de hambre de Palestine Action es, evidentemente, una noticia de gran relevancia. El hecho de que casi no se le dé cobertura es prueba de la represión activa del Gobierno y de la connivencia activa de los medios de comunicación en dicha represión.

Incluso las huelgas de hambre de los presos políticos palestinos recluidos ilegalmente en cárceles israelíes reciben más cobertura de la prensa israelí que la que los medios británicos están dando a la huelga de hambre de los presos políticos de Palestine Action.

Francesca Nadin, antigua presa política de Palestine Action, ha declarado a Electronic Intifada que los periodistas «mainstream» que muestran interés por la huelga de hambre no pueden publicar sus artículos porque los editores los rechazan. Observa que ha habido «un silencio casi total en los medios sobre esta noticia».

Al parecer, los editores suelen utilizar cuestiones legales como excusa para negarse a informar sobre la huelga. Se trata de un pretexto, no de una razón.

Gran Bretaña cuenta con un sistema voluntario de censura militar, denominado Comité D-Notice. Al unirse al comité, los editores británicos se comprometen a evitar informar sobre cualquier asunto que el Gobierno declare como «cuestión de seguridad nacional». En la práctica, esto suele referirse a asuntos que podrían avergonzar al Gobierno.

Para los editores, el sistema ofrece una negación plausible, ya que colaboran en la censura. Para los lectores, hace que los medios de comunicación sean más que inútiles en los asuntos más urgentes y graves de nuestro tiempo.

A diferencia de la década de 1980, cuando los medios de comunicación británicos informaban --aunque rara vez de forma comprensiva-- sobre las huelgas de hambre del IRA, ahora los medios están aún más controlados por el Estado británico. Como prueba de ello, cabe destacar el giro de 180 grados de *The Guardian* con respecto al Comité de Notificaciones D en 2014, cuando se enfrentó a una dura reacción de los servicios de seguridad por sus revelaciones sobre Edward Snowden y la vigilancia masiva ilegal de sus propias poblaciones por parte de los Estados occidentales.

Por primera vez, el periódico aceptó unirse al Comité de Notificaciones D, integrándose plenamente en la arquitectura del Estado de seguridad nacional. Fue recompensado con entrevistas «exclusivas» en primera plana con los jefes del MI5 y el MI6. *The Guardian* se regodeó en lo que debería haber sido la máxima vergüenza para un periódico que se autoproclamaba controlador del poder.

La verdad es que el ataque a las libertades fundamentales en Gran Bretaña está muy avanzado. La disidencia política está sitiada. Las huelgas de hambre no se retransmiten por televisión, ni tampoco los últimos estertores de nuestras moribundas libertades.

*rafaelpoch.com*

---

<https://www.lahaine.org/mundo.php/esta-huelga-de-hambre-no-esta-siendo>